

## ¿CONFIAR O NO CONFIAR? HE AHÍ EL DILEMA

Según una encuesta de *Reforma* (2 de julio), el 46 por ciento de los capitalinos no cree que su voto será respetado en Las próximas elecciones. Se trata de una cifra muy alta -casi la mitad de la muestra y de un síntoma del mal que afecta a nuestro sistema político. Urge revertir esta situación, pero no va a ser fácil y el tiempo se ha echado encima.

Hoy México requiere de una alta dosis de confianza cívica por una razón simple y contundente: Las instituciones políticas tradicionales han perdido su viabilidad, pero Las que deben sustituirlas apenas están naciendo. Entre lo caduco - partido de Estado, presidencialismo sin control, fraude- y lo que debe de nacer -un real y efectivo sistema de partidos, auténtica división de poderes, Estado de derecho- hay un espacio enorme. El buen tránsito de la nave del Estado mexicano por ese oscuro golfo, requiere confianza ciudadana. Desgraciadamente esa no existe en el grado en que se le necesita.

En política, un buen número de mexicanos estamos viviendo un drama shakespiriano. Como al príncipe Hamlet, se nos aparecen fantasmas que nos recuerdan traiciones pasadas y nos alertan sobre otras en el futuro. El resultado es la duda, un vivo sentido de ofensa y la contradicción entre Las ganas de creer y a dificultad de poder hacerlo. ¿Confiar o no confiar?, he ahí nuestro dilema nacional.

Razones para la gran duda sobran. La experiencia histórica es el gran obstáculo para poder creer. La experiencia muestra que el partido que hoy nos gobierna, nació con la voluntad de fraude y la ha preservado intacta desde entonces. El triunfo abrumador en 1929 del primer candidato presidencial del partido de Estado (93.55 por ciento de los votos) habla de un entusiasmo inexplicable de los mexicanos de entonces por un personaje casi desconocido y sin cualidades de líder -Pascual Ortiz Rubio- frente a un opositor de buena facha, como era José Vasconcelos. A una reflexión similar mueve el triunfo de Avila Camacho sobre Juan Andrew Almazan en 1940 con el 93.90 por ciento de los sufragios supuestamente emitidos. Es verdad que, con el paso del tiempo, Las cifras de la victoria de los candidatos del gobierno en situaciones difíciles, se han ido haciendo más humildes y dejando de lado su estilo soviético -74.32 por ciento en la lucha del PRI contra Miguel Henríquez Guzmán en 1952 y apenas 50.74 por ciento en la batalla contra Cuauhtémoc Cárdenas e 1988-, pero a fin de cuentas esa humildad no ha servido para ganar mayor credibilidad.

En política, la confianza del público -la percepción- es el principio del éxito. Por ejemplo, si la mayoría de los consumidores dudan de la efectividad de una política antiinflacionaria, el patrón de gasto y ahorro de esa mayoría terminará por hacer inviable cualquier plan contra la inflación. Si en momentos críticos hay reservas serias de los más frente al discurso -definiciones, compromisos y promesas- y frente a la acción de un actor político, difícilmente se podrá tener éxito.

En tales circunstancias, únicamente si la gran mayoría de los mexicanos tienen seguridad en los procedimientos y conductas institucionales para elegir al sucesor de Carlos Salinas, se podrá evitar un período postelectoral dominado por la incredulidad, la frustración, las acciones antisistema... y los carros antimotines y el resto del arsenal recientemente adquirido por el Ejército. Sólo en un ambiente de aceptación positiva y abrumadoramente mayoritaria del resultado electoral, la inversión nacional y, sobre todo, la extranjera, se mantendrá. Y únicamente con esa inversión podremos continuar con la reconstrucción de la economía.

Las encuestas hechas inmediatamente después del debate del 30 de mayo entre Samuel del Villar (PRD) y Carlos Almada (Instituto Federal Electoral o IFE) en torno a la confiabilidad del padrón electoral, muestran que quienes dan por bueno el padrón con el que vamos a votar el 21 de agosto, son aún minoría y no la mayoría abrumadora que requiere nuestra transición política para llegar a buen puerto. En efecto, la encuesta en la ciudad de México de la Universidad de Guadalajara, señala que sólo un 47.7 por ciento de los encuestados cree que el padrón es aceptable, en tanto que el resto -52.3 por ciento- no sabe o de plano desconfía de él (*La Jornada*, 32 de mayo). La encuesta de *Reforma* (2 de junio) en la capital arroja un resultado peor: únicamente el 39 por ciento de los encuestados declararon tener confianza en ese padrón que tan caro ha costado. En ningún país donde se viva realmente la tan mentada "política moderna", el padrón y todo el proceso electoral -que a fin de cuentas es sólo un medio y no un

fin- está permanentemente bajo sospecha, como es nuestro caso. En las condiciones mexicanas, la política termina por ser no el instrumento de desarrollo que necesitamos, sino un obstáculo.

La duda en torno a la lista de electores o la limpieza por los comicios por venir, son indicadores de algo más profundo, importante e inquietante: la desconfianza generalizada en Las instituciones. Según la encuesta de la Universidad de Guadalajara ya citada, sólo el 36.4 por ciento de los encuestados tuvo una actitud positiva hacia el IFE. ¡Y eso que aún no estallaba el escándalo de Las nueve credenciales de elector con nombre pero sin foto, huella ni firma, encontradas en unos botes de basura en la subdelegación Cuauhtémoc en la ciudad de México: (*REFORMA*, 3 DE JUNIO) Pero ¿cuál es, finalmente, la institución de la cual surgió el IFE y muchas más y que es el centro de todo el entramado de nuestras instituciones públicas?: la presidencia. Finalmente es ahí, en la presidencia, donde se encuentra hoy la fuente principal de la duda. Y eso vuelve la situación muy difícil, peligrosa.

La confianza en la presidencia se empezó a perder hace tiempo: cuando comenzó a fallar en su eficacia como canalizadora de la solución de los grandes conflictos por la vías institucionales. Posiblemente el primer gran fallo cuyas consecuencias aún perduran fue el de 1968, especialmente las matanzas del 2 de octubre y se secuela: la del 10 de junio de 1971. Con altas y bajas, los recelos que entonces surgieron frente a la gran institución como resultado de su prepotencia, sus trampas y su falta de eficacia -el populismo y la

irresponsabilidad de Luis Echeverría y José López Portillo y su carencia de base democráticas -la forma de legitimidad dominante en el mundo de fin de siglo-, se ha ahondado.

Bajo Carlos Salinas, la presidencia empleó a fondo, con inteligencia y decisión, lo que aún quedaba de Las reservas del capital político acumuladas a lo largo de los decenios. Gracias a esas reservas, al presidente Salinas logró remover con éxito los principales obstáculos a su revolución económica neoliberal, y llegó a ser considerado como uno de los líderes más exitosos del mundo periférico. Sin embargo, hoy, al final del sexenio, esas reservas políticas de la presidencia han disminuido notablemente, casi se han agotado.

La primera muestra de este agotamiento al capital histórico de la presidencia, se vio precisamente en el momento en que Carlos Salinas impuso abiertamente a Luis Donald Colosio como candidato presidencial del PRI y como su virtual sucesor. La imposición fue exitosa pero no fue tan fácil como en el pasado; surgieron resistencias inesperadas en la cúpula misma del poder -Manuel Camacho-, y la campaña del partido de Estado ya no tuvo el arranque acostumbrado. Luego, la rebelión chiapaneca del 1° de enero. Mostró de manera dramática las fallas estructurales del gran programa social presidencial del sexenio: Solidaridad; de paso, dejó al descubierto el verdadero significado de haber puesto al ex gobernador de Chiapas y pariente político del presidente - patrociniado González- al frente de la secretaría encargada de organizar la elección de 1994: la

voluntad de aplicar el método Chiapas al resto del país. La destitución de Patrocinio González como secretario de Gobernación, fue una derrota presidencial, como también lo sería la salida de Los Pinos de José Córdoba, el principal consejero y operador político del presidente.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio a fines de marzo, fue un nuevo y duro golpe a una presidencia que ya no mostraba la seguridad de que había hecho gala apenas unos meses atrás, cuando logró que el Congreso estadounidense aceptara firmar con México un tratado de libre comercio (TLC). Mientras ese asesinato no quede debidamente explicado, seguirá siendo una sangría en la confianza institucional del público mexicano. La manera en que se ha llevado hasta hoy la investigación del crimen, ha sido la peor posible. Primero, Miguel Montes, el subprocurador especial declaró que el crimen había sido producto de un acción concertada (4 de abril). De inmediato la televisión saturó las pantallas con videos en cámara lenta que supuestamente probaran cómo varios individuos habían auxiliado a Mario Aburto para llegar hasta Colosio, ponerle el cañón de la pistola en la cabeza, y disparar. Sin embargo, dos meses más tarde, el 2 de junio, ese mismo subprocurador declara que la hipótesis más viable era la opuesta: la del asesino solitario. Ya después antes, las encuestas de opinión mostraban que sólo una minoría de los ciudadanos -23 por ciento confiaba en que las investigaciones oficiales llegaron a poner que las investigaciones oficiales llegaron a poner al descubierto a los verdaderos responsables del atentado

contra Colosio (MORI de México, 8 a 10 de abril). Hoy, hasta la COPARMEX (3 de junio) califica de una burla a la sociedad mexicana Las declaraciones del subprocurador.

Es a raíz de una crisis generalizada de credibilidad -y del temor a sus consecuencias-, que la presidencia se decidió, por fin, a buscar un camino alternativo. Primero se desprendió de José Cordoba y Patrocinio González. Luego entregó la Secretaría de Gobernación a Jorge Carpizo, una gente sin partido y muy diferente a su antecesor. Después, el presidente ordenó a Carpizo a negociar la tercera reforma electoral del sexenio (¡nunca antes había habido tantas reformas políticas en una sola presidencia!)

La tercera reforma política del salinismo permitió lo hasta entonces impensable: dar forma a un consejo general del IFE donde ya no fuera mayoría los representantes del presidente, sino un grupo de consejeros independientes. A estos añadió un cambio similar a nivel local y distrital, penas severas contra delincuentes electorales, la introducción de personas ajenas al PRI en puestos claves del IFE (Juan Molinar Horcasitas, director de Prerrogativas y Partidos Políticos), y una auditoría externa, aunque un tanto al vapor, del padrón.

Es de lamentar que estos cambios tan fundamentales en la estructura institucional electoral, se hayan hecho en el último momento, impuestos por la crisis de credibilidad. La falta de tiempo les resta efectividad. Confiemos, sin embargo, en que aún se pueda evitar el tiempo de los blindados en la calle, y de una nueva

frustración en nuestro lento y penoso proceso de modernización política.